



Los reformistas van a intentar elaborar una mínima común base programática económica que les permita, después del referéndum, formar un nuevo Gobierno transitorio. En la foto: ministros y parlamentarios de UCD en el congreso madrileño del partido.

Después de los pactos de la Moncloa ¿qué?

FERNANDO LOPEZ AGUDIN

A sesenta días del vencimiento oficial de los pactos de la Moncloa, firmados a primeros de noviembre del anterior año, su renovación modificada y ampliada o su sustitución, se ha convertido, lógicamente, en el eje de toda la situación política. ¿Qué hacer después de noviembre? Es la gran interrogante en un momento en el que no faltan, sino todo lo contrario, importantes problemas políticos que reflejan las enormes contradicciones internas que experimenta el proceso democrático.

La agravación del conflicto de los órganos de seguridad del Estado con el sistema democrático, el problema de las autonomías, el inmovilismo de RTVE, las convocatorias electorales municipal y legislativa, la devolución del patrimonio sindical a las centrales obreras —bien presentes estos días en la actualidad política— son algunos de los aspectos más espectaculares con los que se manifiesta la supervivencia de una Administración anacrónica, desfasada y heredera del anterior régimen.

Estas dos crisis, económica y

política, coincidiendo con el final del proceso constituyente, provocan una acentuada agudización de la lucha entre las tendencias reformistas y progresistas de la sociedad española, que va más allá de la clásica división entre derechas e izquierdas. Hoy, como el inmediato ayer cronológico, muestra cómo una parte de la derecha se alinea en el campo progresista y alguna mínima parte de la izquierda, que estima como más conveniente y oportuno para sus propios intereses jugar tácticamente en el campo contrario, forma filas junto con los reformistas.

Todo ello plantea el tema esencial de toda lucha política —el poder— en unos niveles mucho más intensos que los conocidos desde la penúltima gran pugna entre los partidarios de la reforma o ruptura en la primavera de 1976. Si aquel trimestre se dirimió el combate entre estas dos concepciones, el próximo otoño se va a resolver el conflicto entre reformistas y progresistas. Es por ello que la respuesta definitiva que se dé a la interrogante política del momento va a marcar las inmediatas pers-

pectivas políticas, económicas y sociales del país por un espacio de tiempo no inferior al que fue marcado por la confrontación de comienzos de 1976.

Seudodicotomías

Pero los tres planos en que comienza a librarse esta batalla —programático, electoral y económico— generan, a veces, el error óptico de ver alternativas aisladas en cada uno de estos sectores sin entender que son tres frentes del mismo combate político. Así asistimos al planteamiento de seudodicotomías parciales que contraponen un programa de mayoría a un gobierno de mayoría, las elecciones generales a las municipales o la resolución de la crisis económica a la salida de la crisis política.

Tan carente de sentido es pensar en un programa de mayoría que no se plantee el tipo de Gobierno para aplicarlo como apostar por una determinada fórmula gubernamental sin línea programática que desarrollar; defender la convocatoria de elecciones municipales antes de las generales para

impedir la manipulación caciquil desde los municipios, olvidando la manipulación por un determinado Ministerio del Interior en una convocatoria municipal, como defender la prioridad de las legislativas no teniendo en cuenta la existencia de municipios no democráticos; aislar la salida de la crisis económica de la política como lo contrario, etcétera.

Cada una de estas aparentes contraposiciones no hace más que esconder la dicotomía real: ¿Qué tipo de poder va a abordar la consolidación de la democracia? ¿El mismo que dirigió la salida de la dictadura o un nuevo bloque democrático? El problema real no está en el programa político o económico —las habas son contadas y se prestan a muy escasas combinaciones—, sino desde qué fórmulas gubernamentales va a ser orientado, matizado, interpretado o, incluso, violado u olvidado. Porque es evidente —la primera fase del proceso democratizador, con unos pactos de la Moncloa sistemáticamente violados, es sumamente aleccionadora— que las dos tareas claves de la consolidación

del proceso democrático —plan de saneamiento económico y reforma de la Administración— serán resueltas en un sentido o en otro, según quien gobierne. Ese es el más importante eslabón de esta cadena político-económica global.

Es por eso también que el tercer abanico de fuerzas sociales operantes en esta coyuntura, las que pueden aglutinarse bajo el denominador común de bloque conservador, intentan igualmente una solución extraparlamentaria antes de la realización del referéndum constitucional. Desplazar del Gobierno a los reformistas, lograr un Gobierno de personalidades extraparlamentarias que dirija la salida de la crisis político-económica en

pequeñísima parte de la izquierda.

Su, a priori, gran ventaja reside en una cierta contradicción entre el tiempo político y el tiempo económico. Al haberse retrasado excesivamente la discusión constitucional, en parte debido a la ofensiva conservadora en el Senado, que contó con los puntos de apoyo de algunos núcleos reformistas, la finalización del proceso constituyente coincide con la hora veinticinco de los pactos de la Moncloa y con el vencimiento de miles de convenios colectivos a negociar entre septiembre y diciembre. Es decir, hay que abordar —por un expediente u otro— esta negociación económico-social antes de la realización del referén-

la ofensiva progresista, encerraría en un callejón sin salida, como recomponer internamente el propio partido reformista. La citada no simultaneidad de los dos tiempos político-económicos va a ser utilizada para la consecución del primer objetivo y el inminente inicio del primer congreso fundacional de Unión de Centro Democrático —a mediados de octubre— va a ser el escenario del segundo esfuerzo. A partir de ahí, con el aislamiento "económico" del ataque "político" progresista y el partido remodelado, podrá enfrentarse de lleno a la contradicción fundamental de esta nueva fase política: asegurar su continuidad en el poder.

Una prueba de resistencia

Es lo que explica también que el reformismo pueda utilizar, y va a seguir utilizando en su favor, la lucha interna que existe en el seno de la izquierda por hegemonizar o reequilibrar el espacio político entre socialistas y comunistas. Así, el obstáculo político PSOE va a ser contrarrestado con la presión CC. OO. por conseguir un acuerdo político-económico global. Ello no supone que los reformistas defiendan este planteamiento, sino que van a aprovechar esta posición de la primera fuerza sindical para detener a uno de los principales componentes del campo progresista que, además, es indicado por los sondeos preelectorales como la primera fuerza política potencial del país.

Si el PSOE se pregunta con razón qué validez tendría un pacto político sin su presencia, CC. OO. se interroga con no menos solidez sobre qué valor puede tener una negociación entre empresarios y centrales sindicales sin su contribución. Estas dos interrogantes, que tendrán que acabar con el retroceso de una de ellas, son la primera y principal lucha de la serie de batallas que van a marcar esta contienda entre las concepciones reformistas y progresistas y, por supuesto, el futuro político o sindical o económico de quienes intervienen en ella. La unidad de UCD, la correlación de fuerzas internas en el seno del capitalismo español, la hegemonía del PSOE, las perspectivas del PCE, la primogenitura de CC. OO. y las posibilidades de UGT van a sufrir, en mayor o menor grado, sus repercusiones en la misma proporción y nivel que todo el proceso democrático.

A no ser que nadie ceda, que se establezca un empate entre las partes contendientes, y que el agotamiento mutuo producido por este combate, sin vencedores ni vencidos, abra el camino hacia las soluciones extraparlamentarias, que no tienen por qué ser anti-constitucionales, que preconizan las fuerzas conservadoras. Porque toda prueba de resistencia, máxima la que se efectúa sobre una incipiente democracia con graves problemas políticos y económicos por solucionar, tiene un límite.



El obstáculo político del PSOE va a ser contrarrestado con la presión de CC.OO., por conseguir un acuerdo político-económico global. En la foto: Camacho, Sartorius y Nicolás Redondo, entre otros dirigentes sindicales, durante una reunión de trabajo.

la dirección que mejor convenga a los específicos intereses socioeconómicos que representan. Tercera fuerza en presencia, hoy bastante minoritaria y con muy escasas posibilidades, que asiste con sumo interés a esta lucha por el poder que sostienen reformistas y progresistas.

La salida reformista

Es dentro de este cuadro problemático que hay que inscribir la estrategia y táctica reformista que, lógicamente, busca no perder la posición que ocupa. Para ello cuenta con una importante baza objetiva en su mano, además, claro está, de su propia fuerza subjetiva y de la minifuerza subjetiva —que no hay que infravalorar—, que coyunturalmente le presta una

dum constitucional y de las próximas elecciones legislativas y municipales.

En base a este incuestionable dato, los reformistas van a intentar elaborar una mínima común base programática económica —no la máxima que piden sus circunstanciales aliados de la minoría de izquierda— que les permita, después del referéndum, formar un nuevo Gobierno transitorio en espera de que los "tests" preelectorales señalen la fecha más óptima, o menos desfavorable, para convocar elecciones generales y municipales. Se trata, en síntesis, de aprovechar este desfase entre el tiempo económico y el político para poder organizar su permanencia en el poder en las mejores condiciones posibles.

Para ello necesita tanto detener

Requisito indispensable para sobrevivir como organización política unida y consolidada y para reafirmar la inestable hegemonía de la fracción del capital español que hoy ocupa el primer plano en el conjunto de los intereses capitalistas de nuestro país, frente a los sectores que defienden las opciones conservadoras o progresistas. Porque no hay que olvidar que toda esta batalla se desarrolla —no podría ser de otra manera— en el más estricto marco de lo que se denomina economía de mercado. De ahí que el cuadro de combatientes políticos en esta pugna no coincida con el tradicional esquema de derechas e izquierdas. El eje de la lucha radica únicamente en qué tipo de Estado democrático ha de dotarse el actual sistema socioeconómico.